

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	María Eugenia Ramírez Henao y otros
DEMANDADAS	Departamento de Antioquia- Fabrica de Licores de Antioquia FLA
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 005 2018 00944 00
TIPO DE PROCESO	Ordinario
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	138

Medellín, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la apoderada de la demandada contra decisión que declara no probada la excepción previa de falta de jurisdicción.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Como fundamento de las pretensiones de la demanda, aducen los demandantes que son trabajadores oficiales de la Fábrica de Licores y de Antioquia¹.

A su vez, en el acápite de excepciones de la respuesta a la demanda², se propuso **como excepción de mérito** la falta de jurisdicción, indicándose que conforme a la naturaleza de la Fábrica de Licores de Antioquia y sus servidores, y en virtud del numeral 4 del art 104 de la Ley 1437 de 2011, la competencia para conocer del presente asunto es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se cita la sentencia del 21 de junio de 2018 de la Sección Primera del Consejo de Estado con radicado 050011233100020069341901, indicándose que mientras no se den los trámites administrativos de ley, en el término establecido por la autoridad judicial (2 años), que convierta la Fábrica de Licores de Antioquia en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sus empleados seguirán siendo empleados públicos, puesto que la jurisdicción no tiene facultades o poderes de creación de empresas o personas jurídicas.

En la audiencia del artículo 77 del CPT y de la S.S., pese a que dicha excepción se propuso como de mérito, el A Quo la resolvió como previa declarándola no probada, al considerar que la jurisdicción ordinaria laboral sí es la competente para conocer la presente acción, porque los demandantes buscan que se declare su calidad de trabajadores oficiales con relación a las labores que venían desempeñando en la FLA. Aduce que las excepciones previas deben resolverse previamente y no en la sentencia, conforme a los artículos 32 del CPT y de la S.S., 99, 100 y siguientes del CGP. Agrega que los art 104 y 105 del CPACA dejan claro que las discusiones sobre trabajadores oficiales las resuelve la jurisdicción ordinaria y así lo establece más específicamente el art 2 del CPT y de la S.S. Condena en costas a la demandada, fijando agencias en \$3.700.000

Inconforme con dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación indicando que la Sala Tercera de Decisión Laboral del TSM, decidió

¹ FL.2-14

² FL.30

revocar la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín en un caso similar, al considerar que en este asunto la falta de jurisdicción es una excepción que si bien tiene que ver con los asuntos previos, así como la falta de competencia, dada la naturaleza de las pretensiones hacen parte de la decisión de fondo, toda vez que de la naturaleza de los empleados públicos o trabajadores oficiales como lo afirman los demandantes se viene el fondo del asunto. Con base en ello sostiene que la excepción previa de falta de jurisdicción, debe ser establecida al definir el fondo del asunto en la sentencia que ponga fin al proceso.

Cita sentencia del Dr. Roberto Jesús Augusto Cerato Valdés con radicado 2006-94419, donde se exhortó a la Gobernación de Antioquia para que, dentro del término de 2 años a partir de la firmeza de la decisión, se realicen los trámites pertinentes a la Asamblea Departamental del Departamento de Antioquia para que la FLA adopte la organización y la estructura jerárquica que le corresponde al desarrollo de las actividades industriales y comerciales que lleva a cabo. Indica que conforme a lo señalado en la providencia, mientras no pasé ese plazo otorgado al Departamento el cual no ha transcurrido, las personas que trabajen en la FLA seguirán siendo empleados públicos. Alude al Dcto Ley 1222 de 1986, donde se habla de la naturaleza de los trabajadores de las entidades territoriales y departamentales según art 232 y 304, así como a las normas adoptadas por el Departamento, las cuales gozan de presunción de legalidad según las cuales adscribió la Fábrica de Licores de Antioquia a la Secretaria de Hacienda, y a todas las normas citadas al contestar la demanda.

Reitera que la excepción de falta de jurisdicción debe ser resuelta en la sentencia que ponga fin al proceso, en tanto las pretensiones de la demanda tienen su fundamento en definir la naturaleza de vinculación de los demandantes y así definir la jurisdicción que deba conocer de la misma.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Vencido el término de traslado para alegatos no fue presentado escrito alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si hay lugar a declarar probada la excepción de falta de jurisdicción.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Lo primero que ha de indicarse es que, independientemente de lo resuelto por la Sala Tercera de Decisión Laboral de este tribunal en el proceso referido por la recurrente, a juicio de esta Sala la excepción de falta de jurisdicción tiene el carácter de previa, por tanto, se resuelve en la audiencia del art 77 del CPT y de la S.S., como acertadamente lo hizo el A Quo, pues así lo regula expresamente el artículo 32 ibídem y el art. 100 de CGP, aplicable por analogía al procedimiento laboral.

Ahora, frente a la jurisdicción competente para conocer el presente litigio, advierte esta Sala que la pretensión principal de los accionantes es la declaratoria de la calidad de trabajadores oficiales de la Fábrica de Licores de Antioquia; asunto frente al cual la jurisprudencia de la CSJ (CSJ SL9315-2016, del 29 de jun. 2016, rad. 42575, CSJ SL, 18 mar. 2003, rad. 2017, CSJ SL10610-2014, 9 jul. 2014, rad. 43847, CSJ SL, 18. mar. 2003, rad. 20173), tiene dicho que, para que el juez laboral asuma la competencia en un juicio contra una entidad de derecho público, al actor le basta afirmar la existencia del contrato de trabajo o como en este caso, la calidad de trabajador oficial, porque, de controvertirse esa afirmación, al juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existió o no, y sólo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato.

Ha dicho además la jurisprudencia que en estos eventos la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral viene dada desde que el promotor del proceso en la demanda inicial afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo (ficto-presunto o expreso) con una entidad u organismo de la administración pública, bien sea con miras a obtener el reconocimiento de beneficios y derechos legales o extralegales exclusivos de los trabajadores oficiales o discutir sobre los ya existentes, pretensiones que obviamente invitan al juez a razonar sobre la categoría laboral del funcionario como requisito sustantivo previo a resolver cualquier punto relacionado con el contrato de trabajo.

Así las cosas, es obvio que en este caso la competencia es del Juzgado quinto Laboral del Circuito de Medellín, en tanto los demandantes bajo su propio riesgo delimitaron el litigio, al prender la declaratoria de trabajadores oficiales con la Fábrica de Licores de Antioquia, debiéndose resaltar que en caso de no acreditar la calidad de trabajadores oficiales la sentencia necesariamente será absolutoria.

Así las cosas, se **CONFIRMARÁ** íntegramente la decisión que se revisa en apelación.

Costas en esta instancia a cargo de la demandada por resultar vencido con su recurso de alzada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$50.000 en favor de cada uno de los demandantes.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

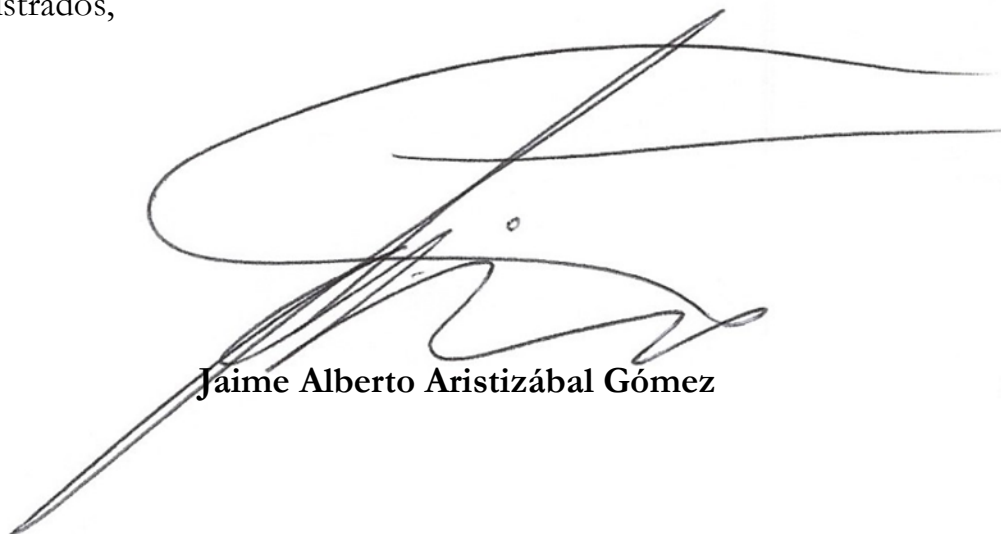
RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por la apoderada de la demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

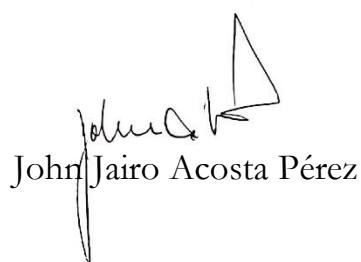
Costas en esta instancia a cargo de la demandada, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$50.000 en favor de cada uno de los demandantes.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

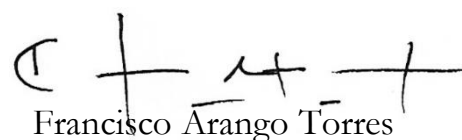
Los Magistrados,



Jaime Alberto Aristizábal Gómez



John Jairo Acosta Pérez



Francisco Arango Torres

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADO** No. 139 fijado hoy en la secretaría de Este Tribunal a las 8 a.m. Medellín, 24 de Septiembre de 2020

Secretario